

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (EsIAS)

ANEXO I MARCO LEGAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

**Proyecto:
REPAVIMENTACIÓN DE CALZADA Y BANQUINAS EN R.P. N°
205**

**Tramo: R.P N° 58 – R.P. N° 6
Sección: Puente s/A° Aguirre – R.P. N° 6
LONGITUD: 21.730 m**

**PARTIDOS: EZEIZA – CAÑUELAS
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
REPÚBLICA ARGENTINA**

**Informe Final
Octubre 2021**

Índice

1.	MARCO LEGAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	4
1.1.	Marco Legal Nacional	4
1.1.1	Constitución Nacional	4
1.1.2	Código penal	4
1.1.3	Ley Nº 25.675 Ley General de Ambiente	5
1.1.4	Ley 24.051 de Residuos Peligrosos	5
1.1.5	Ley Nº 20.284 Preservación de los Recursos del Aire	6
1.1.6	Ley Nº 25.688 Preservación de las aguas	6
1.1.7	Ley Nº 25.831 Información Ambiental	6
1.1.8	Ley Nº25.612 Gestión de Residuos Industriales y actividades de servicios	6
1.1.9	Ley N.º 25.916 Residuos domiciliarios	6
1.1.10	Ley Nº 22.421 Protección de fauna	7
1.1.11	Ley Nº 24.375 Conservación de Biodiversidad	7
1.1.12	Ley Nº 25.743 trata de la Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico	7
1.1.13	Ley Nº 19.587 de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo	7
1.1.14	Ley Nº 24. 557 Riesgos del Trabajo	7
1.1.15	Ley Nº 24.449/94 Ley de tránsito y seguridad vial. Decreto 779/95. Anexo I: sistema de señalización vial uniforme	7
1.1.16	Ley 26.363/08 creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial	8
1.2.	Legislación Provincial de Salvaguarda Ambiental	8
1.2.1	Constitución de la Provincia de Buenos Aires	8
1.2.1	Decreto-Ley 8912/77. Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo	8
1.2.2	Ley Nº 11.723 (modificada por Ley Nº 13.516) Ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales	9
1.2.3	Ley Nº 11.459 y su Decreto Reglamentario Nº 1.741/96	9
1.2.4	Disposición 4059/2009	9
1.2.5	Ley Nº 11.720. Ley de Residuos Especiales	9
1.2.6	Ley Nº 12.257 Decreto Nº 3.511/2007 Código de Aguas- Creación de Autoridad del Agua (ADA)	10
1.2.7	Ley Nº 5965 Protección a las Fuentes de Provisión y a los Cursos y Cuerpos Receptores de Agua y a la Atmósfera	11
1.2.8	Ley Nº 11.347 Residuos Patogénicos	11
1.2.9	Resolución Nº 159/96 y Resolución Nº 94/02 Ruidos	11

1.2.10	Decreto N.º 878/03, ratificado por Ley N.º 13.154 y Decretos Reglamentarios 2231/03 y 3289/04	11
1.2.11	Ley N.º 6312/60 Proyecto de nuevas rutas provinciales	12
1.2.1	Ley N.º 13.927/08 Nuevo código de tránsito	12
1.2.2	Resolución N.º 510/18, OPDS, Clasificación de Proyectos y Obras viales y su EIA	12
1.2.3	Otras leyes	13
1.3.	POLÍTICAS OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE SALVAGUARDAS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES	
	DEL BID	13
1.3.1	OP-703 Política Operativa de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas.	13
1.3.2	OP-704) Política Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales	14
1.3.3	OP-710 Política Operativa de Reasentamiento Involuntario	14
1.3.4	OP-102 Política de acceso a la información	15
1.3.5	OP-761 Política Operativa de Igualdad de Género en el Desarrollo	15

1. MARCO LEGAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Se ha realizado la recopilación de la legislación de mayor significación para la protección del medio ambiente y la gestión ambiental de la provincia de Buenos Aires vinculada al tipo de obra vial.

Se consideró en primer lugar la Legislación Nacional que constituye el marco de referencia de protección ambiental para todo tipo de acción susceptible de intervenir el medio ambiente. Se describe luego la legislación de nivel provincial y las Políticas Operativas (OP) y Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID que son de aplicación para el presente Proyecto y cuyas salvaguardas han sido consideradas especialmente en el desarrollo de este ESIAS.

Las normas de salvaguarda ambiental están consagradas en la Constitución Nacional de la República Argentina, en su artículo 41, que establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.

El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Asimismo, se determina que las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Asimismo, consagra el principio de “desarrollo sustentable” y establece que las autoridades protegerán la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

1.1. Marco Legal Nacional

1.1.1 Constitución Nacional

En el Art Nº 41 se establece que todos los habitantes tienen derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. Introduce el concepto de desarrollo sustentable e introduce disposiciones aplicables a quienes ocasionen un daño al ambiente, señalando la recomposición del daño ambiental perpetrado.

En el Art Nº 43 establece el Derecho a Recursos de Amparo, en el Art Nº 124 establece que el Dominio de los Recursos Naturales pertenece a las provincias, quienes ejercen jurisdicción y retienen el poder de policía en materia ambiental conforme lo determina el artículo 75 inc. 30 de la Constitución Nacional.

1.1.2 Código penal

En el Art. 182, se establece que “Será reprimido con prisión de quince días a un año; 1 El que ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro sacare aguas de represas, estanques u otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales o acueductos o las sacare en mayor cantidad que aquella a que tenga derecho; 2

El que estorbare el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas; 3. El que ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro represare, desviare o detuviere las aguas de los ríos, arroyos, canales o fuentes o usurpare un derecho cualquiera referente al curso de ellas. 4. La pena se aumentará hasta dos años, si para cometer los delitos expresados en los números anteriores, se rompieren o alteraren diques, esclusas, compuertas u otras obras semejantes hechas en los ríos, arroyos, fuentes, depósitos, canales o acueductos.

En el Art. 220, se impondrá prisión de seis (6) meses a dos (2) años, al que violare los tratados concluidos con naciones extranjeras, las treguas y armisticios acordados entre la República y una potencia enemiga o entre sus fuerzas beligerantes o los salvoconductos debidamente expedidos. Si el hecho fuese cometido por un militar el mínimo de la pena se elevará a un (1) año y el máximo de la pena se elevará a cinco (5) años.

1.1.3 Ley N° 25.675 Ley General de Ambiente

Establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable; y los principios de la política ambiental nacional. Establece como instrumento de la política ambiental a la evaluación de impacto ambiental. (Art 8 y 13), la obligación de proporcionar información (Art 16) y participación ciudadana (Art 19) Establece el concepto de daño ambiental (Art 27), la responsabilidad de quien lo causare (Art 28), así como su responsabilidad sobre las acciones preventivas y correctivas de recomposición. (Art 30)

Con relación al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, la ley establece en su Art N° 11, que” toda actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo a su ejecución.

Resolución N° 165/10 y Resolución N° 186/12: Detalla las actividades que requieren la contratación de Seguro Ambiental para la obtención de permisos, habilitaciones e inscripciones en el marco del art. 22 de la Ley N° 25.675.

1.1.4 Ley 24.051 de Residuos Peligrosos

Es una norma de naturaleza mixta, ya que contiene normas administrativas, civiles y penales. Regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición de residuos peligrosos cuando, entre otros, estén ubicados en territorio de una provincia, pero estuvieren destinados al transporte fuera de ella. Clasifica y define los residuos peligrosos de manera muy abarcativa y por lo tanto aplicable a la gran mayoría de los residuos industriales, tanto en su forma líquida como semisólida y sólida. En el Anexo I de la Ley se enumera una lista de 45 residuos peligrosos; y en el Anexo II se presentan las características de peligrosidad.

El Decreto 831/93, establece en los Anexos, categorías de control y listados de características peligrosas. Cabe señalar que las sustancias incluidas en ambos anexos de la Ley son las enumeradas en el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su eliminación, aprobado por Argentina mediante Ley N° 23.922 del 15/4/91. Varias Provincias han adherido a la Ley como a su reglamentación (Decreto 831/93)

1.1.5 Ley N° 20.284 Preservación de los Recursos del Aire

Contiene las "Normas para la Preservación de los Recursos del Aire" para todas las fuentes capaces de producir contaminación atmosférica ubicadas en jurisdicción federal. Si bien la Ley no fue nunca reglamentada, representa un hito cuando se habla de normas de calidad de aire ya que su texto incluye este tipo de normas a nivel nacional. El ámbito de su aplicación son todas las fuentes de contaminación atmosférica ubicadas en jurisdicción federal y en las provincias que deseen adherirse; y la autoridad de aplicación que está constituida por las autoridades sanitarias nacional, provincial y de la Municipalidad de la CABA, en sus respectivas jurisdicciones.

1.1.6 Ley N° 25.688 Preservación de las aguas

Establece los presupuestos mínimos ambientales, para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. Define que las cuencas hídricas como unidad ambiental de gestión del recurso se consideran indivisibles. Establece los usos del agua Define términos, funciones de la autoridad de aplicación, comité de aguas, entre otros.

1.1.7 Ley N° 25.831 Información Ambiental

Instituye el "Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental", establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encuentre en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas.

1.1.8 Ley N°25.612 Gestión de Residuos Industriales y actividades de servicios

Establece los Presupuestos Mínimos para la Gestión de Residuos Industriales y de Actividades de Servicio, con el objetivo de minimizar los riesgos potenciales de los residuos en todas las etapas de la gestión integral; reducir la cantidad que se generan; promover la utilización y transferencia de tecnologías limpias y adecuadas para la preservación ambiental.

1.1.9 Ley N.º 25.916 Residuos domiciliarios

Establece los Presupuestos Mínimos de "GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS". Promueve un enfoque ambiental e integral de los residuos, comprendiendo en la etapa de tratamiento al conjunto de operaciones tendientes al acondicionamiento y valorización de los residuos, a fin de introducir los materiales recuperados en el proceso productivo y reducir el volumen que se va a destinar a disposición final. Refuerza el rol preponderante que tienen las autoridades competentes de las jurisdicciones locales en el manejo de los residuos domiciliarios.

1.1.10 Ley N° 22.421 Protección de fauna

Regula temas concernientes a protección, comercialización, importación y exportación de especies, caza deportiva, comercial y científica. Establece la competencia de la Autoridad de Aplicación para coordinar con los organismos oficiales nacionales y locales, en pos de la prevención de la contaminación o de la degradación ambiental, arbitrando medidas preventivas. Establece la realización de estudios de factibilidad y proyectos de obras, cuando los mismos puedan causar transformaciones en el ambiente de la fauna silvestre, obligando a consultar previamente a las Autoridades nacionales o provinciales competentes en materia de fauna.

1.1.11 Ley N° 24.375 Conservación de Biodiversidad

La República Argentina se compromete a adoptar las medidas necesarias conducentes a conservar la biodiversidad, posibilitar el uso sostenible de sus componentes, distribuir equitativamente sus beneficios, establecer procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de proyectos que puedan tener efectos adversos para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del público en esos procedimientos.

1.1.12 Ley N° 25.743 trata de la Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico

Establece que el patrimonio Arqueológico y Paleontológico forma parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y cultural del mismo

1.1.13 Ley N° 19.587 de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo

Esta ley y sus decretos reglamentarios determinan las condiciones de seguridad que debe cumplir cualquier actividad industrial a nivel nacional a fin de proteger a los trabajadores y disminuir los riesgos a los que están expuestos. Esta ley fue actualizada mediante Decreto 911/96, específicamente referido a las actividades en la construcción.

1.1.14 Ley N° 24. 557 Riesgos del Trabajo

Conforma el marco regulatorio que establece el sistema integral de prevención de riesgos del trabajo (SIPRIT), y el régimen legal de las aseguradoras de riesgos de trabajo (ART). Resulta de aplicación en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Regula la responsabilidad y obligaciones de los empleadores al respecto. Decreto N° 84/96.

1.1.15 Ley N° 24.449/94 Ley de tránsito y seguridad vial. Decreto 779/95. Anexo I: sistema de señalización vial uniforme

Esta norma establece que el Sistema de Señalización Vial Uniforme comprende la descripción, significado y ubicación de los dispositivos de seguridad y control del tránsito y la consecuente reglamentación de las especificaciones técnicas y normalización de materiales y tecnologías de construcción y colocación y demás elementos que hacen a la calidad y seguridad de la circulación vial (art 1). El señalamiento debe realizarlo o autorizarlo el organismo nacional, provincial o municipal responsable de la estructura vial, ajustándose a este



código, siendo también de su competencia colocar o exigir la señal de advertencia en todo riesgo más o menos permanente (art. 2).

1.1.16 Ley 26.363/08 creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial

Mediante esta ley se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio del Interior, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y del privado, la que tendrá como misión la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, nacionales e internacionales

1.2. Legislación Provincial de Salvaguarda Ambiental

1.2.1 Constitución de la Provincia de Buenos Aires

En su Art Nº 28 establece que:

Los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras.

La Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar territorial y su lecho, la plataforma continental y los recursos naturales de la zona económica exclusiva, con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada.

En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables del territorio de la Provincia; planificar el aprovechamiento racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema; promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo; prohibir el ingreso en el territorio de residuos tóxicos o radiactivos; y garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales.

Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire y suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su capacidad productiva, y el resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y la fauna. Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo.

1.1.1 Decreto-Ley 8912/77. Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo

Uno de los pilares de la gestión ambiental lo constituye el ordenamiento territorial en cuanto al uso y ocupación del suelo. El tiempo transcurrido desde su sanción por decreto determina que se cuente hoy con un Texto Ordenado por Decreto 3389/87 con las modificaciones del Decreto- Ley Nº10128 y las Leyes Nº10653, 10.764,13127 y 1 3342.



La ley rige el ordenamiento del territorio de la Provincia, y regula el uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo. Los municipios en virtud de esta ley se obligan a sancionar en su territorio los Códigos Urbanísticos siguiendo los principios de la Ley.

1.2.2 Ley N° 11.723 (modificada por Ley N° 13.516) Ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales

La Ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales establece la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. Tiene por objeto la protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del ambiente en general en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, a fin de preservar la vida en su sentido más amplio; asegurando a las generaciones presentes y futuras la conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica. Regula Deberes y Derechos de la población incluyendo abstenerse de realizar acciones u obras que pudieran tener como consecuencia la degradación del ambiente de la Provincia de Buenos Aires. Establece que todo emprendimiento que implique acciones u obras que sean susceptibles de producir efectos negativos sobre el ambiente y/o sus elementos debe contar con una Evaluación de Impacto Ambiental previa.

1.2.3 Ley N° 11.459 y su Decreto Reglamentario N° 1.741/96

Establece la obligatoriedad y el procedimiento técnico administrativo para otorgar Permisos y Certificado de Aptitud Ambiental para establecimientos industriales en el territorio provincial.

Si bien la Ley 11459 regula la Radicación Industrial, los Anexos del Decreto referidos a Metodología de Estudios de Evaluación Ambiental, son aplicables como guía para cualquier tipo de proyecto.

El Decreto 1741/96 tiene por objeto garantizar la compatibilización de las necesidades del desarrollo socioeconómico y los requerimientos de la protección ambiental a fin de garantizar la elevación de la calidad de vida de la población y promover un desarrollo ambientalmente sustentable. Los establecimientos alcanzados por el presente decreto deben desarrollar sus procesos en un marco de respeto y promoción de la calidad ambiental y la preservación de los recursos del ambiente, dando cumplimiento a lo establecido en el presente decreto y sus anexos, como así también los que establezca la Autoridad de Aplicación. Establece una fórmula polinómica para la Categorización de establecimientos industriales según su Nivel de Complejidad Ambiental (N.C.A.). Establece el procedimiento y plazos para cumplir con la obligación de obtención del Certificado de Aptitud Ambiental para adecuar o iniciar sus actividades.

En los Anexo 4 y 5 del Decreto, se determinan los Aspectos Técnicos mínimos que debe contemplar la evaluación de impacto ambiental (EIA) para Proyectos o Establecimientos A Instalarse y para Establecimientos Instalados o Preexistentes. Se designa en el Artículo 75, que la Autoridad de Aplicación de la Ley 11.459 es la Secretaría de Política Ambiental, a efectos de garantizar el integral cumplimiento de todas las disposiciones legales establecidas y ejercer la fiscalización necesaria para la efectiva vigencia de esta. En la actualidad este instituto se denomina Organismo de Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS)

1.2.4 Disposición 4059/2009

Se exige la contratación del seguro ambiental a ciertas actividades

1.2.5 Ley N° 11.720. Ley de Residuos Especiales

La Ley 11.720, regula la generación, manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de residuos especiales en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. La presente Ley está reglamentada por Decreto 806/97. En relación con el almacenamiento transitorio de residuos especiales, el Anexo VI detalla los requisitos mínimos (complementa Resolución 592/00). Decreto 650/11. Introduce modificaciones a la reglamentación de la Ley 11.720, principalmente en relación con cálculo de tasa anual y define los conceptos de pequeño generador y generador eventual.

1.2.6 Ley N° 12.257 Decreto N° 3.511/2007 Código de Aguas- Creación de Autoridad del Agua (ADA)

La ley 12257 (Texto Actualizado según leyes 14520, 14703 y 14873), establece:

Establece la protección, conservación y manejo del recurso hídrico. Comprende la planificación hidrológica, emergencias hídricas, vedas sanitarias, el inventario físico del agua, así como la fijación de la línea de ribera. Establece distintos usos con sus correspondientes permisos y concesiones. Estos usos se discriminan en: agropecuario, industrial, recreativo, deportivo y de esparcimiento, así como también para el uso energético, minero, piscícola, para la flotación y navegación y el uso del agua con propiedades terapéuticas, medicinales y termales.

Según el Código, corresponde al Poder Ejecutivo provincial:

- Formular la política del agua
- Coordinar las actividades vinculadas con el recurso hídrico dentro de los lineamientos definidos por la legislación provincial
- Promover la difusión de información a la comunidad,
- Impartir instrucciones para la coordinación de las actividades vinculadas

A esa política formulada públicamente deberán ceñirse las actividades de la administración provincial a la que le corresponde disponer reservas que prohíban o limiten uno o más usos o constitución de derechos individuales sobre agua de dominio público.

También está facultada para establecer preferencias y prerrogativas para el uso del agua del dominio público por categoría de uso, regiones, cuencas o parte de ellas, privilegiando el abastecimiento de agua potable y alentando criterios de reutilización de agua para uso industrial o cualquier actividad productiva que así lo permita.

Además, podrá imponer restricciones y limitaciones al dominio privado para el mejor aprovechamiento y preservación del agua y para la protección del medio ambiente y de los bienes públicos y privados de impactos dañinos del agua.

Atribuciones de la Autoridad del Agua: Según la Ley le corresponde:

Reglamentar y supervisar y vigilar todas las actividades y obras relativas al estudio, captación, uso, conservación y evacuación del agua

Proyectar o ejecutar obras susceptibles de repercusión interjurisdiccional



Cuando se proyecte realizar una obra susceptible de afectar a otra provincia o a la Ciudad de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo deberá consultar previamente al Poder Ejecutivo de la afectada sobre el proyecto de la obra, el programa de operación y los efectos que pueda producir en ella.

Línea de Ribera. Fijación

Le corresponde a la Autoridad del Agua fijar y demarcar la línea de ribera sobre el terreno, de oficio o a instancia de cualquier propietario de inmuebles contiguos o de concesionario amparados por el Código de Aguas.

Se considerará crecida media ordinaria a aquella que surja de promediar los máximos registrados en cada año durante los últimos cinco años. A falta de registros confiables se determinará conforme a criterios hidrológicos, hidráulicos, geomorfológicos y estadísticos evaluados a la luz de una sana y actualizada crítica.

1.2.7 Ley N° 5965 Protección a las Fuentes de Provisión y a los Cursos y Cuerpos Receptores de Agua y a la Atmósfera

Se establece la protección a las fuentes de provisión, cursos y cuerpos receptores de agua, así como también de la atmósfera. Prohíbe todo tipo de descarga de efluentes. Delega el poder de policía a los municipios. Prohíbe a las reparticiones del Estado, entidades públicas y privadas y a los particulares; el envío de efluentes residuales sólidos, líquidos o gaseosos, de cualquier origen, a la atmósfera, a canalizaciones, acequias, arroyos, riachos, ríos y a toda otra fuente, cuerpo receptor de agua, superficial o subterráneo, que signifique una degradación o desmedro del aire o de las aguas de la Provincia, sin previo tratamiento de depuración o neutralización que los convierta en inocuos e inofensivos para la salud de la población o que impida su efecto pernicioso en la atmósfera y la contaminación, perjuicios y obstrucciones en las fuentes, cursos y cuerpos de agua. Sus Decretos Reglamentarios N° 3395/1996 y N° 32/1997, establecen indicadores y parámetros.

1.2.8 Ley N° 11.347 Residuos Patogénicos

Modificada por la Ley N° 12.019 y vetada parcialmente por el Decreto N° 3.232/92, y su Decreto Reglamentario N° 450/94,

1.2.9 Resolución N° 159/96 y Resolución N° 94/02 Ruidos

Aprueba Norma IRAM N° 4062 y recomienda aplicar a los municipios como método de medición y clasificación de ruidos molestos al vecindario.

1.2.10 Decreto N°878/03, ratificado por Ley N°13.154 y Decretos Reglamentarios 2231/03 y 3289/04

Este Decreto establece el Marco regulatorio para la prestación de los Servicios Públicos de Agua potable y desagües cloacales en la Provincia de Buenos Aires.

Crea el OCABA, que es el Organismo de Control de las modalidades y calidad de la prestación directa del Servicio, por parte del Estado y mediante el sistema de concesión. Establece los Niveles apropiados del servicio y las Normas de Calidad. Asimismo, determina las obligaciones y derechos de los usuarios y las normas sobre el Régimen Tarifario de los Servicios.



El Decreto 2231/03 modifica los artículos 15 y 63 del Marco Regulatorio reconociendo entre los Distribuidores concesionarios del servicio público de agua potable y desagües cloacales a las Entidades Cooperativas, en virtud de su naturaleza y los antecedentes históricos en la constitución y prestación del servicio.

1.2.11 Ley N° 6312/60 Proyecto de nuevas rutas provinciales

Establece que todas las carreteras que se proyecten para la red troncal de la provincia deberán incluir provisiones para la seguridad y rapidez del tránsito, cualquiera sea el volumen que pudieran adquirir en el futuro. Indica que las trazas de caminos troncales que proyecte la Dirección de Puentes y Caminos no cruzarán centros poblados, incluyendo determinados requisitos como ser que la zona camino será ensanchada en sus dos lados, en la longitud determinada por la proyección ortogonal de la parte edificada, el ancho de ambas superficies adicionales variará según la proximidad de la población al camino, según la importancia de la población y, en general según la mayor o menor probabilidad de edificación de las tierras linderas a la traza.

1.1.1 Ley N° 13.927/08 Nuevo código de tránsito

Adhiere a las leyes nacionales 24.449-Ley de tránsito y seguridad vial y a la ley 26.363/08 que crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

1.2.12 Resolución N° 510/18, OPDS, Clasificación de Proyectos y Obras viales y su EIA

Establece que los proyectos y obras viales públicos o privados, a los fines de su evaluación en el marco de la Ley N° 11.723, se clasificarán según el siguiente nivel de complejidad ambiental:

Proyectos Nivel 1: previstos para un área de influencia que presenta niveles de sensibilidad ambiental y cuya ejecución pueden implicar riesgos o impactos significativos en el entorno natural, su biodiversidad, la población y/o su riqueza cultural, el valor de conservación y/o protección del paisaje, en función de la magnitud de las obras previstas y/o de la baja capacidad del medio para absorber las intervenciones. Se considerarán de Nivel 1 los proyectos que involucren la ejecución de Obras de Arte de envergadura o manejo hidráulico diferente del existente en la traza, que afecten un área protegida o prevean obras a una distancia menor a 500 metros de su límite, que afecte el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (categorías amarilla y roja) de la Provincia de Buenos Aires y/o que conlleve medidas de reasentamientos poblacionales. Las obras previstas requerirán medidas de mitigación específicas previo análisis y formulación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Proyectos Nivel 2: Son aquellos en los cuales las características de las obras que se prevé desarrollar y/o del área de influencia no presenta aspectos que pongan en riesgo o afecten significativa y negativamente el entorno natural, su biodiversidad, la población y su riqueza cultural. Las obras previstas se ejecutarán predominantemente dentro de la zona de camino sobre la calzada ya existente, con el objeto de mejorar la transitabilidad o seguridad, sin modificaciones de la traza (límite de zona entre frentistas). Se trata de obras tales como: terceros carriles dentro de la zona de camino; las comprendidas bajo la clasificación de “Rutas Seguras” - pavimentación de banquetas y/o construcción de carriles de sobrepaso - excepto que incluyan nuevas trazas/variantes; Obras de Repavimentación; Estaciones de Cobro; Estaciones de Pesaje y peajes; Áreas de Descanso;



Pasarelas; Obras de Iluminación; Obras de Señalización. Este tipo de proyectos requiere medidas de mitigación y gestión ambiental generales, principalmente durante la etapa de ejecución de la obra, que pueden ser definidas y ejecutadas a través de un Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Esta resolución establece que los proyectos que involucren diversas obras sean de Nivel 1 y Nivel 2, estarán precedidos de un Informe Ambiental Preliminar Integral (IAPI) común sobre el corredor vial, como línea de base para la totalidad de las obras que involucra el proyecto integral. El contenido del Informe Ambiental Preliminar Integral (IAPI), del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y/o Plan de Manejo Ambiental (PMA) se establece en el Anexo I de la Resolución.

1.2.13 Otras leyes

Ley N° 13.592 Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. Ley N° 12.704 Paisaje Protegido de interés

Ley N° 12.276 Régimen del arbolado público

Ley N° 10.699 y su Decreto Reglamentario N° 499/91 Uso de Agroquímicos Ley N° 14.343 Pasivos Ambientales El Decreto 95/14 reglamentario de la ley.

1.3. POLÍTICAS OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE SALVAGUARDAS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES DEL BID

Se han identificado cinco Políticas Operativas que se aplican al presente Proyecto y cuyas salvaguardas han sido consideradas en el desarrollo de este ESIAS:

- OP-703 Política Operativa de Medio Ambiente y cumplimiento de Salvaguardias.
- OP-704 Política Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales
- OP-710 Política Operativa de Reasentamiento Involuntario
- OP-102 Política de acceso a la información
- OP-761 Política Operativa de Igualdad de Género en el Desarrollo

A continuación, se desarrollan cada una de estas Políticas Operativas vigentes y publicadas por el BID

1.3.1 OP-703 Política Operativa de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas.

El objetivo de esta Política es impulsar la misión del Banco en América Latina y el Caribe para lograr un crecimiento económico sostenible y para cumplir objetivos de reducción de pobreza consistentes con la sostenibilidad ambiental de largo plazo.

Los objetivos específicos son:



- i. Potenciar la generación de beneficios de desarrollo de largo plazo para los países miembros, a través de resultados y metas de sostenibilidad ambiental en todas las operaciones y actividades del Banco y a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión ambiental de los países miembros prestatarios;
- ii. Hay que asegurar que todas las operaciones y actividades del Banco sean ambientalmente sostenibles, conforme lo establecen las directrices establecidas en la presente Política;
- iii. Incentivar la responsabilidad ambiental corporativa dentro del Banco mismo.

En cuanto al alcance, el documento señala: “la Política rige para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), abarcando productos financieros y no financieros, operaciones de los sectores público y privado, así como los aspectos ambientales asociados a los procesos de adquisiciones y al manejo de instalaciones del Banco” (BID 2006 p 1).

El BID señala “Las salvaguardas rigen para todo el ciclo de proyecto, con el propósito de asegurar la viabilidad ambiental de las operaciones financiadas por el Banco. De acuerdo a las prácticas de desarrollo sostenible, el Banco adopta de manera general un enfoque precautelar frente a los impactos ambientales. El Banco busca evitar impactos ambientales negativos. Cuando éstos sean inevitables, las operaciones financiadas por el Banco requerirán medidas de mitigación. Para aquellos impactos que no puedan mitigarse completamente, será necesario implementar mecanismos de compensación o reposición. (BID, 2006. p 9)

La aplicación de esta política implica la categorización de este proyecto como Tipo “B”, ya que se estima que la operación puede causar principalmente impactos ambientales y sociales negativos localizados y de corto plazo, para los cuales se propone como parte del PGAS y del PRI, medidas de mitigación efectivas para atenuarlos.

1.3.2 OP-704) Política Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales

El objetivo de esta Política es orientar la acción de la institución para asistir a sus prestatarios en la reducción de riesgos derivados de amenazas naturales y en la gestión de desastres, a fin de favorecer el logro de sus objetivos de desarrollo económico y social.

Esta política consta de dos objetivos específicos, relacionados entre sí:

- i. Dar mayor eficacia al BID en la tarea de ayudar a sus prestatarios a realizar una gestión sistemática de los riesgos relacionados con amenazas naturales mediante la determinación de esos riesgos, la reducción de la vulnerabilidad y la prevención y mitigación de los consiguientes desastres antes de que ocurran.
- ii. Facilitar la prestación de asistencia rápida y adecuada del BID a sus países miembros prestatarios en casos de desastre, en un esfuerzo por revitalizar eficientemente sus iniciativas de desarrollo y evitar que se vuelva a crear una situación de vulnerabilidad.

1.3.3 OP-710 Política Operativa de Reasentamiento Involuntario

El objetivo de esta política es minimizar los perjuicios que pudieran ocurrir en el modo de vida de las personas que habitan en la zona de influencia del proyecto, evitando y disminuyendo la necesidad de desplazamiento físico, y asegurando que, si tal situación existiere, las personas sean tratadas de manera equitativa y, cuando sea factible, participen de los beneficios que ofrece el proyecto que requiere su reasentamiento (BID, 1999. p. 6).



En cuanto a su alcance, contiene a todo desplazamiento físico involuntario de personas causado por el proyecto del Banco, tanto público como privado. Considera evitar o minimizar los desplazamientos

Además, enfatiza que en el caso que en que las personas sean desplazadas, reciban una rehabilitación justa y adecuada (BID 1999. p. 6).

Esta política operativa está dirigida a mejorar la calidad de vida a través de:

- i. asegurar la seguridad física
- ii. no erosionar las capacidades productivas y de ingresos de la población afectada.
- iii. asegurar la participación de la comunidad.
- iv. compensar según costo de reposiciones
- v. crear oportunidades económicas para la población desplazada.
- vi. proporcionar condiciones adecuadas de vivienda y servicios.

Estos derechos deben estar contenidos en un marco institucional apropiado.

1.3.4 OP – 102 Política de acceso a la información

“El Banco reafirma su compromiso con la transparencia en todos los aspectos de sus operaciones como forma de ajustarse a las prácticas óptimas existentes a nivel internacional, especialmente en los países de América Latina y el Caribe, y con objeto de mejorar su rendición de cuentas y efectividad en el desarrollo. Mediante la aplicación de esta política el Banco quiere demostrar el uso transparente que hace de los fondos públicos y, al estrechar sus relaciones con los interesados, mejorar la calidad de sus operaciones y actividades de conocimiento y fortalecimiento de capacidad”. BID 2010^a, p.1).

La política se basa en los siguientes principios:

Principio 1: Máximo acceso a la información.

Principio 2: Excepciones claras y delimitadas

Principio 3: Acceso sencillo y amplio a la información

Principio 4: Explicaciones de las decisiones y derecho a revisión

1.3.5 OP-761 Política Operativa de Igualdad de Género en el Desarrollo

El objetivo de la Política es fortalecer la respuesta del Banco a los objetivos y compromisos de sus países miembros en América Latina y el Caribe de promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. (BID 2010, p.2)

La Política identifica dos líneas de acción:

- i. la acción proactiva, que promueve activamente la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a través de todas las intervenciones de desarrollo del Banco;



DIRECCIÓN DE
VIALIDAD

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES



- ii. la acción preventiva, que integra salvaguardas a fin de prevenir o mitigar los impactos negativos sobre mujeres u hombres por razones de género, como resultado de la acción del Banco a través de sus operaciones financieras.

Esta Política reconoce que la búsqueda de la igualdad requiere de acciones dirigidas a la equidad, lo cual implica la provisión y distribución de beneficios o recursos de manera que se reduzcan las brechas existentes (BID, 2010)